

## Políticas de Igualdad: EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO

Almudena Cabezas, Fac. CC. Políticas y Sociología UCM  
Plataforma de Mujeres Diversas de la CAM

Conviene destacar que las dos últimas legislaturas han supuesto grandes avances en la igualdad de género en nuestro país, comparables a los que tuvieron lugar durante la transición política, cuando el derecho al divorcio, a la propiedad y al aborto, junto a la educación mixta y otras tantas iniciativas, cambiaron la vida cotidiana de las gentes y nuestra sociedad. Cuando la moda en política parece insistir en la desaparición de múltiples derechos, conviene rescatar esta evidencia para asegurar la consolidación y el goce pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, reproductivos y sexuales, recientemente adquiridos<sup>1</sup>.

En la última década la igualdad de género ha estado en el centro de los debates políticos y la reflexión pública en formas, intensidades y argumentos hasta ahora desconocidas, acercándose en ocasiones al objetivo de ser tratada como una cuestión principal para nuestra sociedad. En la estela de la promulgación y desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género y de la Ley de Igualdad de Género<sup>2</sup> se han producido debates y acciones transversales, llegando a impregnarse de igualdad todos los ámbitos, desde la política educativa a las formas y usos de la cooperación al desarrollo<sup>3</sup>. Sin embargo, nos queda mucho por hacer.

Reconocer las mejores condiciones adquiridas no puede ser motivo de un regocijo tal que nos conduzca a morir de éxito. Aunque nos encanta repetir que mujeres y hombres somos iguales ante la ley, en la práctica la actual situación en nuestro país dista mucho de confirmarlo<sup>4</sup>. En este sentido, el compromiso y el trabajo en *pro* del necesario cambio cultural que implica la igualdad efectiva entre todas las personas, independientemente de su condición social, sexo, sexualidad, edad, etnia y/o raza, así como ciudadanía-, amerita una reflexión más profunda.

Por ello no me es posible pensar en los avances sin abordar aquellos espacios y temáticas en los que no se han producido cambios, sin reflexionar sobre las oportunidades perdidas. Y aunque sea fácil realizar una lectura de los hechos pasados cómodamente instalada a lomos de la historia, y aún más fácil hacer leña del árbol caído ante la expectativa de un cambio electoral, la revisión crítica de lo acontecido tiene sentido en tanto indicativa para replantear las sendas que nos permitan alcanzar los objetivos que aún nos son esquivos.

Una evaluación somera de las políticas de igualdad y sus consecuencias permite comprobar que el desarrollo de las leyes ha sido desigual, en parte por la distinta aprehensión, interpretación y cobertura desplegada por las CC AA, en virtud de sus muy legítimas competencias autonómicas, pero también porque el compromiso y la profundidad de los cambios requeridos no han sido sostenidos en el tiempo. De hecho,

---

<sup>1</sup> El desarrollo normativo sobre igualdad en nuestro país es extenso y puede consultarse en *Dossier Legislación sobre Igualdad de trato y no discriminación*, CEPC, Boletín de Documentación nº 34, 2010 (pp. 363-471).

<sup>2</sup> Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ([BOE de 29 de diciembre 2004](#)) y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres ([BOE de 23/03/2007](#)).

<sup>3</sup> Sirvan de ejemplos la temática de Igualdad en la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el desarrollo de numerosos [recursos vinculados](#) a dicha experiencia y la [Estrategia de Género de la Cooperación Española](#).

<sup>4</sup> Por citar algunas referencias, puede consultarse de María Pazos *Economía e Igualdad de Género: retos para la Hacienda Pública en el siglo XXI*; y de Carmen Castro “*Modelos de conciliación e Igualdad de Género*” y “*Análisis de los permisos de maternidad, paternidad y parentales en la UE*”.

es posible identificar una diferencia clara en los objetivos y líneas de trabajo entre la primera y la segunda legislatura, así como un mayor énfasis en las acciones de reconocimiento que en aquellas otras de carácter marcadamente distributivas. Sin despreciar el considerable impacto simbólico y material de las políticas de reconocimiento, lo cierto es que los avances en igualdad en los ámbitos de la economía productiva y, sobre todo, del cuidado han sido menores.

La importancia de lo reglado en los cambios civiles en cuanto al matrimonio y adopción para personas del mismo sexo<sup>5</sup> y el reconocimiento de la diversidad sexual y la transexualidad<sup>6</sup>, entre otras medidas, absolutamente necesarias, es que se trata de mecanismos de adquisición de derechos. Y, es precisamente eso, lo que se hecha en falta al revisar las medidas puestas en marcha en relación a la economía del cuidado. Por ejemplo, el sesgo de género y el mermado desarrollo de una ley tan impactante social y económicamente como es la Ley de Dependencia<sup>7</sup>, o la discrecionalidad de algunas medidas como el publicitado *cheque bebé*-, de absoluta discrecionalidad. Igualmente, los pasos dados en la conciliación laboral y familiar a partir del desarrollo de la Ley de Igualdad, no apuntan aún hacia la evidente necesidad de corresponsabilidad como ejemplifica el tratamiento respecto a la duración del permiso de paternidad<sup>8</sup>.

Por otro lado, las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar han seguido manteniendo un sesgo de género, como si únicamente concernieran a las mujeres, y se ha desaprovechado la oportunidad de legislar a favor del reconocimiento pleno en el régimen general de la seguridad social de las empleadas del hogar, a pesar de haber dispuesto de seis años de bonanza económica y superávits para el desarrollo y consolidación de este derecho fundamental. A pesar de todo el esfuerzo realizado en la visibilización, valoración y ampliación de derechos en el mundo laboral y empresarial, hoy en día sigue sin valorarse la economía del cuidado, y es en el hogar, en la intimidad de las relaciones cotidianas donde las mujeres seguimos siendo las protagonistas de un cuento de terror, y solo en la recta final de la segunda legislatura se ha buscado responder a esta larga demanda ciudadana.

La amplitud de las contradicciones durante la segunda legislatura ha puesto en entredicho el esfuerzo sostenido en años previos y el compromiso real con el cambio, a pesar de la puesta en marcha de una serie de planes nacionales de calado estratégico, pero que no han venido acompañados de la suficiente difusión y acciones de sensibilización<sup>9</sup>. Asimismo, la tenacidad para impulsar la vulgarmente denominada Ley del aborto, cuando la ley que regula aspectos fundamentales en torno a los derechos sexuales y no solo a los reproductivos<sup>10</sup>, contrasta fuertemente con el refuerzo de las

---

<sup>55</sup> Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio ([BOE 2/07/2005](#))

<sup>6</sup> Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas ([BOE 16/03/2007](#)).

<sup>7</sup> Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las Personas en situación de dependencia ([BOE 15/12/2006](#)); y, una crítica al proceso y resultado legislativo por Ana Hernando “[Una crítica feminista a la ley de dependencia](#)”.

<sup>8</sup> Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida ([BOE 7/10/2009](#)), cuya entrada en vigor estaba prevista para el 2011 y que ha sido pospuesta, de forma que su implementación será decidida por el nuevo gobierno en 2012.

<sup>9</sup> Asimismo, durante la misma están en marcha los siguientes Planes Estratégicos o Nacionales: Plan estratégico de igualdad de oportunidades (2008-2011); Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género; Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual; y, Plan de atención y prevención de la violencia de género en la población extranjera inmigrante (2009 - 2012).

<sup>10</sup> Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del embarazo ([BOE 04/03/2010](#)), vinculada al Real Decreto 825/2010, de 25 de Junio 2010, de desarrollo

bases del compromiso estatal con el estado Vaticano, dando cuenta de los límites del marco y campo discursivo en torno a la igualdad en nuestro país.

Cuando un gobierno socialista bloquea en el congreso de los diputados iniciativas vinculadas a modificar el Concordato con el Vaticano, vigente desde 1953 o el Acuerdo Económico de 1979<sup>11</sup>, facilitar la apostasía o impulsar el proyecto de Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa, no cabe duda de que hemos perdido una oportunidad. Aunque adoremos sin tapujos el vellocino de oro de la modernidad, parece ser que seguimos siendo un país sociológicamente católico, en el que la jerarquía católica que mantiene un proyecto social en las antípodas de la igualdad, la equidad y la tolerancia, goza de un estatus privilegiado que le permite entorpecer el disfrute de algunos derechos fundamentales de las personas, recogidos en la legislación internacional.

Los escasos avances respecto a la laicidad y el reconocimiento de la economía del cuidado, son dos notables oportunidades perdidas. La primera, en tanto oportunidad histórica de ponernos al día con el principio clásico liberal de la modernidad europea occidental, a la que se supone pertenecemos, y alcanzar una verdadera separación iglesia-Estado (financiera, educativa, etc.). Y, la segunda, que habría permitido erosionar un poco más al patriarcado, trabajando los cambios simbólicos y materiales respecto a la división sexual del trabajo para evitar que las mujeres sigamos siendo personas con sobrecarga de roles, que afrontamos segregación laboral horizontal y vertical, y una galopante precarización de la existencia, fortalecida por las discriminaciones de clase, etnia, edad y ciudadanía<sup>12</sup>.

Sin embargo, para explicar el freno en estos dos objetivos y las iniciativas a ellos vinculados debemos fijarnos en los actores intervinientes y los procesos de negociación que se dieron entre ellos. De hecho, aunque la propaganda política-partidaria y las formas de la política contemporánea tienden a visibilizar a los gobiernos como actores principales del cambio, hemos llegado hasta aquí, con todo lo que nos falta, gracias al trabajo constante de los colectivos feministas y de mujeres, LGTB y civiles de diversa índole, el impulso y sostén de las academias, las ONGs, los cuerpos de especialistas profesionales, etcétera. En definitiva, una multitud de actores que permiten constatar un cambio generacional en el que empiezan a desaparecer algunas marcas y lastres de la misoginia y homofobia, propias de la cultura franquista, y del que también participan las y los gobernantes, dando un impulso fundamental a leyes y políticas públicas en respuesta a los reclamos y *sentires* demandados por una buena parte de la ciudadanía.

Considerar esta dimensión de la participación ciudadana en el impulso de las políticas de igualdad de género y su influjo efectivo es fundamental para entender la compleja dinámica política que explica los *cómos* y los *porqués* del avance en algunas áreas y los frenos recurrentes en otras<sup>13</sup>. Las negociaciones políticas entre dichos

---

parcial de la misma y Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, de garantía de calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo.

<sup>11</sup> Por ejemplo, los artículos III y IV del *Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos*, conceden impresionantes exenciones fiscales a la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada, y sus provincias y sus casas, como, por ejemplo: la Contribución Territorial Urbana y la exención total y permanente de los *impuestos reales o de producto*, sobre la renta y el patrimonio ([BOE, 15 diciembre 1979](#)).

<sup>12</sup> Estas cuestiones han sido ampliamente tratadas por UNIFEM al abordar las cadenas globales de cuidado, y ha sido abordado en el monográfico Diálogos, *Derechos Económicos de las Mujeres*, Hegoa-ACSUR-Las Segovias.

<sup>13</sup> Un ejemplo adecuado es el proceso que llevó a la propuesta de la Ley Integral contra la Violencia de Género, en *Mujeres en Red*, <http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?article1315>

colectivos, feministas, de mujeres y LGTB, los sucesivos miembros del gobierno socialista y al interior de su propio partido, junto a otras organizaciones empresariales, sindicales, eclesiásticas y de profesionales, dan cuenta de los límites simbólicos y materiales para las políticas de igualdad en nuestro país.

Entender el establecimiento de círculos de intercambio entre actores, donde las temáticas, los derechos y las necesidades, son negociados según el tiempo, el interés, la oportunidad, la fortaleza y las resistencias de cada uno de ellos, es tan fundamental, como sopesar la actitud de los y las dirigentes socialistas y la fortaleza de sus convicciones feministas personales, como por ejemplo el apoyo explícito del presidente del gobierno a la igualdad de género. Asimismo, es imprescindible atender a la intensidad del despliegue de presiones y negociaciones que llevaron a cabo las feministas al interior del propio PSOE y del ejecutivo -tanto como la diversidad de orientaciones sostenidas por ellas-, para alcanzar una correlación de fuerzas positiva.

Sin embargo, la constatación de cambios en la constelación feminista del ejecutivo mostró sus límites en un momento dado, siendo el fulgurante ascenso y posterior descalabro del Ministerio de Igualdad, el ejemplo palmario. De hecho, la merma en la capacidad ejecutiva por jerarquía perdida junto al traslado de la Secretaria de Igualdad a un ministerio sin capacidad territorial, ha supuesto, además, un retroceso o vuelta a la tradicional identificación de las necesidades de las mujeres con las políticas hacia minorías o grupos vulnerables, y de las políticas de igualdad con acciones sociales paliativas, ajenas a cualquier viso de transversalidad. Es más, el descalabro jerárquico y simbólico de las políticas de igualdad, puede interpretarse como el indicador más severo de una serie de medidas en las que el estado ya no apuesta más por el bienestar, ni garantiza los derechos, sino que más bien parece dedicado, si cabe, a corregir algunos excesos del sistema.

En definitiva, mucho del terreno ganado se ha perdido fácilmente, resultando considerablemente debilitada la percepción ciudadana sobre la importancia de las políticas de igualdad para toda la sociedad, sobre todo, ante la prioridad que, con la excusa de la crisis, se ha dado a los *mantras* neoliberales –control del déficit y la inflación, privatización de servicios públicos básicos como educación y salud, ect. Este cambio de percepciones se acompaña de una profundización de las desigualdades sociales como resultado de las políticas de ajuste, que ya sabemos siempre redundan negativamente sobre las mujeres al reforzar de manera especial la división sexual del trabajo<sup>14</sup>. Y en este contexto es difícil avizorar una estructura de oportunidades para el cambio, al menos, en el horizonte cercano.

---

<sup>14</sup> Informe UNIFEM 2008/2009: El progreso de las Mujeres en el Mundo [¿Quién responde a las Mujeres?. Género y Rendición de Cuentas.](#)